

NOTAS DIGITALES N° 3

junio 2010



Notas Digitales N°3 – Ciudad, Barrio y Organización

Este documento corresponde a un trabajo generado por el [Área Ciudad Barrio y Organización](#) de [SUR Corporación](#), tercero de la serie “Notas digitales” creada con el objetivo de difundir, compartir y estimular la reflexión en torno a las problemáticas del hábitat urbano y las organizaciones sociales en Chile.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO:

Aportes de la Perspectiva Autogestionaria a la reconstrucción en Chile [Artículo Digital]. Notas Digitales, artículos para la reflexión sobre hábitat y organización social. Santiago de Chile: Área Ciudad, Barrio y Organización, SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación, Centro de Documentación SUR, N°3, junio 2010.

APORTES DE LA PERSPECTIVA AUTOGESTIONARIA A LA RECONSTRUCCIÓN EN CHILE

Introducción

En este artículo presentamos algunas reflexiones que surgen a partir del escenario que representa el terremoto, desde la perspectiva del desarrollo de experiencias de autogestión de hábitat. La mayor parte de las ideas aquí expresadas son resultado de diversos espacios de intercambio con dirigentes y organizaciones sociales en Chile¹. Entre estas organizaciones se ha emprendido un trabajo por recuperar modalidades autogestionarias y cooperativas de producción de hábitat, que fueron prácticamente eliminadas tras años de imposición del modelo neoliberal de producción de ciudad y vivienda en nuestro país.

Corresponde señalar también que parte importante de este proceso considera las reflexiones y aprendizajes motivados por el vínculo que Chile ha retomado con la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (SELVIP).



Dichato, junio 2010

¹ Nos referimos a los espacios de reflexión generados en la práctica de la Red de organizaciones por el hábitat popular en Chile, y de la Red Observatorio de Vivienda y Ciudad. En particular, el 25 de marzo se realizó una reunión de organizaciones sociales para compartir un diagnóstico sobre el terremoto en Chile, y el 31 de marzo el foro “Perspectivas de la reconstrucción desde la organización social”, convocado por la Red Observatorio de Vivienda y Ciudad.

En ese marco en particular, se realizaron en el mes de abril las Jornadas Solidarias de Organizaciones Sociales para la reconstrucción en Chile.²

En esta ocasión pudimos compartir, en conjunto con habitantes y dirigentes de las zonas más afectadas por el terremoto, tanto el diagnóstico como perspectivas acerca del proceso de reconstrucción en Chile.

Creemos que existe en la coyuntura actual la oportunidad de repensar cómo estamos construyendo ciudad. En torno a proyectos autogestionarios de reconstrucción se puede vislumbrar procesos de transformación mayor respecto del modelo que hoy domina en los espacios de la vida productiva, social, valórica y cultural de nuestro país. En efecto, una experiencia de autogestión o cooperativismo puede tener en nuestro contexto un impacto altamente significativo, y en este sentido convertirse en germen de un proceso mayor de transformación social, política y cultural.

1. El terremoto de febrero y la reconstrucción en Chile

El terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010 impactó a Chile en su totalidad, y con mayor profundidad y desgarró a las regiones del Maule y Biobío. En estas regiones la intensidad del terremoto provocó un posterior maremoto, con enormes pérdidas de bienes materiales y vidas humanas. Ciudades y poblados quedaron con alto nivel de daños, o incluso totalmente devastados.

La catástrofe y la posterior emergencia no fueron bien enfrentadas por los gobiernos de Bachelet y Piñera, dejando en evidencia un mal diseño institucional para responder a desastres de esta magnitud. La Oficina Nacional de Emergencia tuvo un lamentable desempeño, mientras el accionar de las Fuerzas Armadas fue objetivamente negligente ante el manejo del maremoto: no se dio aviso de la alerta de tsunami de acuerdo con el protocolo existente para sismos de gran intensidad, y las mismas autoridades descartaban la posibilidad de maremoto aun horas después de que ya se había producido.

No fue sino gracias a que el conocimiento popular se impuso, que la gran mayoría de la población en las zonas costeras se trasladó a los cerros tan pronto ocurrió el terremoto, salvándose así miles de vidas.³

Por otra parte, en las primeras horas de la emergencia la institucionalidad estatal, no fue capaz de dar una respuesta adecuada y oportuna a la crisis de servicios y conectividad que se generó. Como contraparte a esta realidad, a pesar de que el discurso público nunca mencionó a las redes sociales como parte de la tarea, la solidaridad se expresó en cientos de iniciativas de organizaciones y redes, grupos de amigos, voluntariado universitario. Estas acciones fueron vitales y efectivas para diagnosticar, recolectar y distribuir ayuda en las zonas más afectadas.

Efectivamente, diversas iniciativas autogestionadas surgieron de personas y grupos anónimos. Se coordinó y movilizó así ayuda en alimentos, artículos para mujeres, ancianos y lactantes, herramientas de trabajo, juguetes, manuales para enfrentar la emergencia, ayuda para animales, talleres de salud mental, entre otros. Se apoyó la generación de ollas comunes, hornos y huertas comunitarias. Grupos de distintos puntos del país llegaron a trabajar junto a las familias en la remoción de escombros y limpieza, y miles de voluntarios colaboraron en levantar las primeras viviendas de emergencias o “mediaguas”.

En materia de vivienda, se contabilizan alrededor de 370 mil viviendas con daños importantes, 190 mil de ellas destruidas o con daños severos. En respuesta a la emergencia habitacional, el gobierno se ha enfocado en la entrega de mediaguas que, en colaboración con la Fundación “Un Techo para Chile”, al 21 de mayo sumaban 50 mil. Algunas de estas viviendas se levantan en los mismos terrenos de los propietarios de las casas destruidas.

² Aprovechamos de agradecer el valioso aporte que fue para nosotros la visita de compañeros y compañeras de la SELVIP, de las cooperativas del MOI: La Unión, Perú, La Fábrica, Mate Amargo, El Molino, como también de todas las personas y dirigentes que nos recibieron en las distintas localidades que visitamos: Villa Olímpica, Barrio Franklin, Talca, Constitución, Parral, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Dichato.

³ Al 16 de mayo se contabilizaban en todo el país, un total de 521 víctimas fatales y 56 desaparecidos. A estas cifras, fuentes oficiales agregan más de 800 mil damnificados, contabilizando heridos, personas sin vivienda y sin trabajo.



Mediaguas levantadas en terrenos de propietarios, Barrio Seminario, Talca, abril 2010.

En cambio, para el caso de allegados o de los habitantes de sectores costeros devastados por el maremoto se han armado campamentos o “aldeas” de mediaguas en las periferias de los poblados, en los cerros, lejos del mar. En casos como Dichato, por ejemplo, la aldea ya alcanza un número superior a las 500 mediaguas. No se sabe si se tratará de una solución transitoria, pero hay alta probabilidad de que finalmente se convierta en radicación.

En los territorios más afectados, el nivel de daño en materia de vivienda es evidente. Sin embargo, como en muchas zonas de la Región Metropolitana y de Valparaíso, en varios sectores la destrucción ocurrió al interior de las viviendas, y es por ello que se habla de un terremoto “mentiroso”. Se subdimensiona el daño ocasionado y, sin embargo, en amplios sectores se agravan situaciones preexistentes de precariedad habitacional, pobreza y aislamiento social.

Sobre todo en las zonas costeras más afectadas, a los daños en vivienda se suma la pérdida masiva de fuentes de empleo y herramientas de trabajo, a lo que se agrega una relación compleja de conflicto de intereses entre los pescadores artesanales y los empresarios portuarios.

A poco tiempo de ocurrido el terremoto, el gobierno lanzó la campaña “Chile unido reconstruye mejor”, que anunciaba los beneficios a los que podrán acceder los damnificados en sus viviendas: subsidios para reconstrucción o reparación, a los que pueden acceder,

individualmente, las familias que demuestren su condición de damnificadas. Junto a ello, desde el propio gobierno se comenzó a promover como solución definitiva el uso del subsidio en la compra de viviendas prefabricadas. Incluso se exhibían en el portal web del Ministerio de Vivienda (MINVU), las viviendas ofrecidas por unas cuantas empresas, facilitando la transacción en un formato de tres pasos: 1. Elija la vivienda de su preferencia; 2. Abra la ficha de Información; 3. Contacte a la empresa.

Por otro lado, se dio curso también al Plan “Manos a la obra”, consistente en entrega de bonos en dinero para reparación o mejoramiento de viviendas de emergencia. Llama la atención que, como parte de este plan fueron elegidas, sin licitación pública, tres únicas empresas como proveedoras de materiales: Construmart, Easy y Sodimac.

Mientras tanto, otros procesos comenzaron a ocurrir. Familias de todas las ciudades afectadas denuncian que constructoras e inmobiliarias se les acercan con ofertas para comprar sus terrenos a precios que llegan hasta el 20% de su valor. En algunos casos también se ofrecen permutas de los terrenos por viviendas alejadas del centro. De esta forma, inmobiliarias y especuladores aprovechan la desesperación de miles de familias que quedaron con sus viviendas inhabitables y sin recursos para demoler o reconstruir.



Aldea “El Molino”, Dichato, junio de 2010.

Así, en distintas localidades se están desarrollando procesos de expulsión, frente a la avanzada de proyectos de desarrollo inmobiliario, turístico o empresarial. Varios de ellos venían por años intentando imponerse en las dinámicas de desarrollo urbano y territorial, y han visto ahora la oportunidad de concretar sus aspiraciones.

Por otro lado, en todas partes la lógica del mercado del suelo divide a los habitantes según su relación con la propiedad de la tierra. Allegados y arrendatarios, que muchas veces han habitado por décadas en un lugar, quedan en una zona difusa de la política pública, y excluidos de los procesos de reconstrucción territorial. En tanto, la mejor opción que se les ha ofrecido es acceder a una vivienda prefabricada por la vía del subsidio, la cual, por los valores de los terrenos, probablemente será localizada en la periferia de las ciudades. De esta manera, la expulsión masiva de población por razones de mercado está siendo un hecho.

Al acercarse a las experiencias concretas, se visualiza con mayor claridad la existencia de una estrategia deliberada de favorecer procesos de promoción del negocio inmobiliario y de desarrollo empresarial, que dejan fuera a la población, a la ciudadanía y la sociedad civil. Operan estrategias de desinformación, desorganización y división, mediante la instalación de conflicto y desconfianza entre los propios habitantes, estrategias que se montan sobre el shock, y que conducen a que la gente se mantenga pasiva frente al curso de los hechos. En algunos poblados, la estrategia comunicacional ha acompañado un fuerte cerco militar, que controla y neutraliza incluso a los jóvenes voluntarios que se acercan a ofrecer ayuda a las comunidades⁴.

El gobierno ya ha tomado una decisión política y económica. En informe de la Dirección Ejecutiva de Reconstrucción del 25 de mayo, se presentó la estrategia de reconstrucción de al menos 12 grandes centros urbanos.⁵



Construcción destruida en venta. Constitución, mayo 2010

Esta estrategia se implementará a través de convenios de colaboración entre MINVU, Municipios y equipos regionales, estableciéndose una “Gerencia Regional de Proyecto”, que contratará universidades, consultoras e instituciones de fomento para establecer en cada ciudad un Plan Maestro y un Plan de Inversiones. El esquema de trabajo es la alianza público-privada.

Algunos ejemplos. En Constitución, la reconstrucción quedó en manos de la empresa forestal y celosa Arauco- Celco, que firmó el 18 de marzo un convenio con el municipio y el Ministerio de Vivienda, para diseñar un nuevo Plan Maestro para la ciudad. La empresa se volvió prácticamente dueña del lugar, resolviéndose así, en la coyuntura del terremoto, un conflicto histórico de la empresa con los pescadores de la localidad y grupos ambientalistas, a favor del grupo empresarial.

En Talca, a pesar de que inicialmente se había optado por la conformación de un consorcio de entidades sin fines de lucro y de organizaciones sociales, el alcalde entregó el plan de reconstrucción a la inmobiliaria El Bosque S.A, del grupo Hurtado Vicuña. Lo mismo sucedió en Talcahuano con Cencosud, y el MINVU anunció al menos siete convenios más de este tipo.

⁴ Emblemático en este sentido es el caso de Dichato, que se mantuvo bajo control militar dos meses después del terremoto.

⁵ Presentación de Pablo Allard del Plan de Reconstrucción “Chile Unido Reconstruye Mejor” en Seminario Fundación País Digital. Los 12 centros urbanos corresponden a: Santa Cruz, Curicó, Talca, Constitución, Pelluhue, Cauquenes, Linares, Parral, Dichato, Talcahuano, Coronel, San Juan Bautista (Juan Fernández).

2. Las bases para enfrentar un proceso de reconstrucción

La experiencia y los aprendizajes demuestran que efectivamente las crisis pueden ser una oportunidad para transformar y mejorar los contextos donde ellas ocurren. El modelo de producción de ciudad y de vivienda en Chile ha generado agudas inequidades urbanas, alto nivel de segregación, fragmentación social y pobreza que, oculta bajo las cifras oficiales, se vive de manera individual y silenciosa. La voracidad y el descontrol del mercado de suelo desataron en nuestros centros urbanos el fenómeno de expulsión de los pobres de la ciudad, que a todas luces se está intensificando en la coyuntura del terremoto.

En este escenario tienen lugar procesos de organización local por lo general incipientes, con pocas posibilidades efectivas de incidir en las decisiones político-económicas que se están tomando. Al golpe emocional por el miedo, nivel de pérdidas y daño, sigue la situación de emergencia, resolver la urgencia de la necesidad, que hace difícil que se levanten visiones de futuro. Así, tampoco se reconoce que muchas veces los problemas tienen sus raíces en situaciones previas de precariedad, desigualdad social y conflicto de intereses.

La gran mayoría de las iniciativas de las organizaciones sociales no aparecen en los medios de comunicación masivos, y no dejan de ser expresiones puntuales. Décadas de políticas neoliberales y de prácticas clientelares que instrumentalizaron la participación social, muestran hoy sus resultados: dispersión y fragmentación de las luchas populares, frente a una demanda que generalmente se expresa en la *espera por una solución*, que llegue de las autoridades o de algún otro benefactor.

Con todo, el descontento social también se ha expresado en movilizaciones organizadas a lo largo de todo el país. Sólo en el último mes: en Penco, localidad de la región del Biobío, cerca de 50 familias armaron barricadas quemando una mediagua; habitantes de Cauquenes llegaron hasta el centro de la capital para manifestar su descontento por la falta de soluciones urgentes; el 13 de mayo, más de 5.000 estudiantes universitarios marcharon en Santiago para protestar por la falta de apoyo a estudiantes damnificados.

El 1° de junio un grupo de familias de allegados de Chiguayante emprendió la toma de un terreno aledaño al sector en que habitan, reclamando sus derechos a permanecer en el sector, oponiéndose a la venta del terreno a privados; el 2 de junio, organizaciones de pobladores en Santiago marcharon exigiendo la participación de sus organizaciones en la reconstrucción. En algunos sectores, grupos de vecinos se resisten a ser expulsados y reivindican su derecho a seguir viviendo cerca del centro o junto al mar.

Y así, a lo largo de estos meses ha habido movilizaciones de distintos grupos en las ciudades y localidades de las regiones afectadas. A la vez, se han venido gestando algunas iniciativas de articulación de demandas que, si bien son incipientes, representan un avance en el campo de la fuerza popular.

La búsqueda de coordinación de fuerzas sociales orientada a objetivos comunes resulta central, y se está pasando del rol reivindicativo a la búsqueda de soluciones. Luego será necesaria la construcción de una política e institucionalidad social que dé soporte a las propuestas.

Hace ya tiempo que hemos venido discutiendo, en distintos espacios de la sociedad civil, con participación de organizaciones de base, que se debe levantar con fuerza una contrapropuesta a lo que son las lógicas de mercantilización del suelo que hoy día se imponen. En este sentido, la situación de catástrofe posibilita plantearse cómo concretar experiencias autogestionarias, a manera de respuesta y también como una forma de construcción política, en el marco de un debate mayor respecto de la construcción de ciudades democráticas y estilos de vida más solidarios.

En el actual escenario se están gestando algunas iniciativas de reconstrucción que abren posibilidades en esta dirección. No es sencillo discutir cómo se debe hacer la reconstrucción cuando hay fuertes políticas en curso e incipientes procesos de organización. No obstante, podemos señalar algunas ideas que están siendo planteadas y puestas en circulación en torno a prácticas concretas de acompañamiento y colaboración a nivel local:

- En particular en los contextos destruidos por catástrofes naturales, se hace más importante que nunca recuperar la historia, la memoria, los vestigios, los recuerdos de la vida anterior; la recuperación de las luchas, de los procesos colectivos y personales, de sus experiencias y aprendizajes. Este ejercicio permitirá hacer contrapeso a la “máquina del olvido” que traen los procesos de reconstrucción por el mercado, otorga una base de conocimientos para reconstruir y una visión, una motivación para el futuro.

- Luego, el proceso de reconstrucción debe sustentarse en el sentido que las propias comunidades, barrios y poblaciones le dan a su trayectoria; así, la voluntad colectiva puede transformarse en acción. Los habitantes, sobre la base de una organización, consenso o construcción comunitaria, deben preguntarse y resolver temas como: ¿cómo se reconstruyen los espacios urbanos y comunitarios de los pueblos y centros urbanos?, ¿cuáles serán las mejores soluciones habitacionales para enfrentar la emergencia y cómo se reconstruirán las viviendas definitivas?, ¿cuáles son los recursos asignados y como se invertirán?

- Respecto a la articulación coyuntural y las estrategias institucionales, parte de las prácticas comunitarias de reconstrucción debe ser la relación con el Estado. Desde ahí se concibe y orienta la acción transformadora: la relación con el Estado es parte de la lucha social, no hay transformación del Estado si no se construye esa relación. En este sentido, deben establecerse mesas e instancias para la construcción de acuerdos entre distintos actores, con el fin de empujar un proceso de elaboración de propuestas de políticas que, originadas de la lucha social, logren penetrar en la estructura del Estado.

- Con relación a lo anterior, es fundamental reivindicar el ámbito del gobierno local, de los municipios. La reconstrucción requiere de descentralización en cuanto a toma de decisiones e inyección de recursos a escala local: las autoridades locales, en conjunto con las comunidades organizadas, deben estar preparadas para la participación y exigir protagonismo en la toma de decisiones respecto a los procesos locales de reconstrucción.

- Cuando no hay voluntad política en las autoridades locales, la comunidad organizada debe exigir que ellas ejerzan un efectivo rol de representación, esto es, hacer efectivo el gobierno y la democracia a nivel local. Debe prepararse también para participar en los procesos de decisiones que se tomarán en el camino de la reconstrucción; por ejemplo, respecto a los planes

de inversión. Especialmente en relación a los planes reguladores comunales, la comunidad debe capacitarse y avanzar en exigir una participación efectiva y vinculante.

- En este proceso es central que la comunidad logre desarrollar una propuesta propia de reconstrucción territorial, es necesario que las organizaciones concentren sus esfuerzos en demostrar capacidad de idear y gestionar sus propias soluciones.

En estos procesos, es muy importante el respeto por la organización endógena en cada territorio, considerando el nivel embrionario de las organizaciones que han surgido en la coyuntura del terremoto. Esto debido a que se corre el riesgo de caer en la instrumentalización o el paternalismo que tienden a acompañar procesos en que se busca la expansión del movimiento popular “por arriba”, replicando la lógica de acción de los partidos políticos tradicionales y del aparato burocrático estatal.

3. Aportes de la perspectiva autogestionaria de la producción de hábitat en la reconstrucción en Chile

Difícilmente se podrá revertir la dinámica que impone la alianza público-privada en la reconstrucción a mayor escala, y del modelo mismo de producción de hábitat impuesto por más de 30 años en Chile. No obstante, en distintos espacios del mundo social se discuten y proyectan alternativas que viabilicen procesos más democráticos y solidarios en la reconstrucción del hábitat, así como en la defensa de los derechos de pobladores y habitantes afectados por el terremoto.

Asimismo, desde una perspectiva regional, vemos que en América Latina se han impulsado procesos importantes en materia de autogestión del hábitat, con distintos resultados. Las experiencias latinoamericanas nos muestran que transitar al camino de la autogestión de hábitat es posible y necesario.⁶ En particular en el escenario de la reconstrucción en Chile, la perspectiva autogestionaria puede resultar clave en diversos

⁶ Particularmente interesante resulta mirar hoy día la experiencia de México D. F. donde el terremoto del año 85 generó condiciones para que surgiera un Movimiento Popular Urbano que se puso a la cabeza de la lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad. También en este camino se debe conocer la experiencia paradigmática del cooperativismo autogestionario de propiedad colectiva y ayuda mutua de la FUCVAM de Uruguay, y la experiencia del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos MOI en Buenos Aires, entre muchas otras.

- Por un lado, es necesario viabilizar alternativas a las soluciones “únicas” que aparecen desde la visión pública y mediática. A través de procesos autogestionarios sería posible incorporar, por ejemplo, alternativas de reconstrucción con materiales de menor costo, como el adobe, procesos que podrían ser asumidos por las propias familias y comunidades. Así también, se podría trabajar en soluciones de hábitat que integren en el territorio a propietarios, allegados, arrendatarios. De esta forma se podría contribuir tanto a la democratización de los territorios, como al desarrollo de la creatividad local, levantando prácticas solidarias y fraternas, en oposición a la solución individual y estandarizada ofrecida a través del vigente sistema de subsidios y la oferta privada.
- El desarrollo de la noción de autogestión, en un escenario de disputa por el territorio como se está dando en los centros urbanos y borde costero, colabora con identificar el conflicto y hacerle frente desde las bases territoriales. Los habitantes amenazados con ser expulsados, conscientes de sus derechos y de la posición que ocupan en la disputa, podrán elaborar argumentos y alternativas para negociar colectivamente con las autoridades.



Brotes en medio de la destrucción. Dichato, junio 2010

- Por otro lado, la reconstrucción tiene un costo para el país⁷, que es asumido por todos los chilenos a través de la venta de activos públicos, recorte de programas sociales y el alza relativa de impuestos. Parte de ese costo es absorbido como ganancia por los sectores empresariales que participarán del proceso, como ha ocurrido históricamente con los subsidios en vivienda. Alternativas autogestionarias permitirían que los recursos fueran aprovechados íntegramente por los afectados y que no se convirtieran en ganancias para las empresas, mejorando al mismo tiempo la calidad de las soluciones.
- En el enfrentamiento de la emergencia, el terremoto también ha mostrado ser una oportunidad de restablecer tejido social. Es posible proyectar esta dinámica en procesos de rehabilitación, reparación o reconstrucción que impliquen la participación, el logro de acuerdos, la acción colectiva. En esta misma línea, el terremoto motivó el surgimiento de una nueva generación de líderes naturales que se va formando en el trabajo efectivo de la organización. La autogestión aplicada en procesos de reconstrucción tendría un gran potencial educativo, colaborando en que la comunidad se haga consciente de sus capacidades y recursos, reforzando al mismo tiempo la identidad y los vínculos comunitarios.

Por último, también destacamos la importancia del desarrollo de experiencias autogestionarias que demuestren capacidad de la organización social, que a futuro puedan tener impacto en las definiciones de políticas públicas en materias de vivienda y hábitat. Así, por ejemplo, podría avanzarse en la formalización del traspaso directo de recursos estatales a las organizaciones para la autogestión de sus soluciones habitacionales, retomando una tradición de sistemas cooperativos, de autoconstrucción o ayuda mutua en la producción de hábitat en Chile.

⁷ El terremoto dejó cerca de 30 mil millones de dólares en pérdidas. El costo de la reconstrucción, según los anuncios del 21 de mayo, es de 8.400 millones de dólares.